



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 23 de Agosto de 2022

Autos y Vistos; Considerando:

1º) Que la presente causa corresponde a la competencia originaria del Tribunal, de conformidad con lo decidido en el precedente publicado en Fallos: 329:3890 y en las causas CSJ 230/2011 (47-E)/CS1 "ENOD S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y CSJ 47/2012 (48-A)/CS1 "Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencias del 22 y 28 de agosto de 2012, sustancialmente análogas, entre otras, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad y con el propósito de evitar reiteraciones innecesarias.

2º) Que, sentado lo anterior, cabe recordar que este Tribunal ha establecido reiteradamente que medidas cautelares como la requerida no proceden, en principio, respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan (Fallos: 328:3018, entre muchos otros).

3º) Que, por otro lado, toda parte que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditar *prima facie* la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifiquen resoluciones de esa naturaleza (Fallos: 323:337 y 1849, entre muchos otros).

El examen de la concurrencia del segundo requisito mencionado exige una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego por la sentencia definitiva (Fallos: 319:1277).

4°) Que en el limitado marco de conocimiento que ofrece el examen de una medida como la requerida en el *sub examine*, el Tribunal considera que los elementos y antecedentes existentes -hasta el momento- no permiten tener por configurados los aludidos presupuestos de admisibilidad de la cautela requerida, en particular, en lo que atañe al peligro irreparable en la demora.

En efecto, a tenor de la respuesta brindada por la Provincia de Córdoba al requerimiento dispuesto a fs. 248 por el Tribunal (véase escrito de fs. 261/262), la accionada no ha iniciado, por el momento, procedimiento de cobro alguno en concepto de diferencias por alícuotas del impuesto a los ingresos brutos, con sustento en el lugar de radicación del establecimiento productivo de la sociedad demandante, por los ejercicios fiscales aquí involucrados. Dicho extremo, corroborado por la manifestación de la parte actora obrante a fs. 246, punto II, obsta a la configuración de una situación de perjuicio inminente o irreparable (art. 232, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional. II. Correr traslado de la demanda interpuesta contra la Provincia de Córdoba, la que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días (arts. 338 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Para su comunicación al señor Gobernador y al señor Fiscal de Estado, líbrese oficio al señor juez federal en turno de la ciudad de Córdoba. III. Rechazar la medida cautelar requerida. Notifíquese y comuníquese a la Procuración General de la Nación.

Parte actora: **Kimberly-Clark Argentina S.A.**, representada por su **letrada apoderada, Dra. María Inés Brandt**, con el patrocinio letrado de los **Dres. Tomás Enrique García Botta y Stella Maris Crespin**.

Parte demandada: **Provincia de Córdoba**, representada por su **Procurador del Tesoro, Dr. Juan Manuel Delgado**, con el patrocinio letrado de la **Dra. Leticia Valeria Aguirre** y por su **letrada apoderada, Dra. Sonia L. Trinidad**.